

Conclusiones

Felipe Rojas Arias

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros

ROJAS ARIAS, F. Conclusiones. In: *Ayer mineros, hoy ecoguías y concesionarios: tensiones en torno a la conservación ambiental, el uso de la tierra y el trabajo en Guasca, Cundinamarca* [online]. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2015, pp. 183-193. Opera prima collection. ISBN: 978-958-738-589-2. <https://doi.org/10.7476/9789587385892.0005>.



All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença [Creative Commons Atribuição 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia [Creative Commons Reconocimiento 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Conclusiones

En esta investigación se analizaron las tensiones que tienen lugar en Guasca por cuenta de la constitución de la RBE. Las condiciones históricas de usos de los recursos naturales, arraigadas en ciertas prácticas cotidianas y económicas, contrastan con los discursos de la biodiversidad, la restauración ecológica y el ambientalismo. En Pueblo Viejo se presentan tensiones entre los funcionarios de la FNC y la población por la manera de entender los usos de la tierra que se encuentran al interior y exterior de la RBE. Los habitantes locales conciben que el aprovechamiento de este recurso debe estar acorde a su vocación. Esto quiere decir, sembrar los árboles en zonas secas o en las cabeceras de los potreros en donde no crezca pasto o se necesite contrarrestar la erosión.

Por su parte, la FNC promueve un discurso que propende por los usos sustentables de la tierra, el agua y el bosque, así como su restauración ecológica. Incluso, pretenden extender este tipo de uso a la población de la región, es decir a otros propietarios, a través de la pedagogía y la educación ambiental. Sin embargo, estas pretensiones de la FNC parten del aprendizaje a través del ejemplo, más que de la interacción, pues hasta el momento han sido pocas las formas de persuasión de la población local a través de reuniones o

talleres que fomenten usos conservacionistas de los recursos ambientales.

Las formas de entendimiento de la vocación de los recursos naturales tienen que ver con unas lógicas culturales y unas representaciones de las maneras adecuadas de su aprovechamiento. Por ejemplo, los conocimientos sobre cómo atraer el agua a partir de la siembra de ciertas especies vegetales en determinados sitios de los potreros que no interfieran con las actividades productivas hacen parte del acervo que entra en tensión con los procesos de restauración ecológica desarrollados por la FNC en la RBE. No solo es, entonces, una tensión por cuenta de las dificultades económicas que acarrea la siembra total de los potreros de la RBE (lo cual es un asunto que no sucederá, según el jefe de la reserva), se trata además de una tensión sobre los significados atribuidos a los recursos naturales.

Las dificultades económicas de la siembra de árboles en los potreros al interior de la RBE utilizados para el pastoreo en una comunidad campesina mayoritariamente dedicada a la ganadería lechera tienen, obviamente, un peso dentro de la tensión. Esto se hizo evidente en el trabajo de campo en donde se pudo apreciar que los pobladores locales veían con preocupación la restauración ecológica a nivel de las dificultades económicas. Sin embargo, es necesario no perder de vista en el análisis cómo las formas de uso y entendimiento de la vocación del suelo están atravesadas por formaciones discursivas históricas y culturales que se encuentran en constante debate y definición. Allí yacen, además, las consideraciones locales sobre los peligros que acarrea la extensión de la montaña

para la seguridad de los pobladores, que tienen que ver con representaciones particulares de la naturaleza y los sujetos peligrosos (guerrilla, fieras y ladrones) asociados a esta.

Estas tensiones de tipo cultural se expresan en las formas de entendimiento de la naturaleza y la finca como unidades de territorio en oposición o articulación al bosque, el monte o la montaña. Además, se oponen los significados de naturaleza salvaje y peligrosa con los de la biodiversidad y la conservación ambiental. Si bien en esta investigación la pregunta central no se preocupó por indagar a mayor profundidad en las representaciones de la naturaleza entre los campesinos, presentó algunos elementos preliminares útiles para criticar las ideas de estos sujetos como desligados del territorio y carentes de cultura, los cuales se dejan abiertos para su indagación y discusión en ulteriores trabajos.

Desde las consideraciones locales, la naturaleza (montaña) es una entidad salvaje y peligrosa que alberga seres humanos y no humanos que pueden causar daño, por lo que es necesario mantenerla a raya. En otras ocasiones, la naturaleza (monte) es un valor agregado a la finca y no se opone a esta unidad territorial, pues hace parte integral de esta a nivel estético y económico.

Lo anterior conduce a plantear que la naturaleza es múltiplemente conceptualizada, es decir, no es un todo homogéneo y coherente, sino que se encuentra en constante producción y significación. Tal condición de la naturaleza significa que las tensiones en Pueblo Viejo no solo tienen tintes económicos, sino que se dan por la definición del territorio y la naturaleza. Situando el debate en relación con otros casos en

donde, a diferencia de Guasca, se ponen en escena tensiones entre conservación y etnicidad, que se presentaron en este trabajo (Bocarejo, 2011; Durán, 2009; Li, 2002; Luque y Valenzuela, 2001; Ojeda, 2012; Ulloa, 2004), se propone que las ideas sobre los campesinos que desconocen sus relaciones y simbolizaciones de la naturaleza están atravesadas por políticas de la diferencia que marcan las etnicidades (como las de los indígenas) a partir del desconocimiento de otras “diferencias culturales” (las de los campesinos).

A la luz del caso de Guasca, a partir de estas articulaciones entre políticas de la alteridad y políticas ambientales, saltan a la vista las desventajas de los grupos campesinos para ser partícipes del manejo de los recursos del entorno y ser respetadas y reconocidas sus formas de relación y simbolización de la naturaleza. Al respecto, surgen algunos interrogantes a partir de la falta de reconocimiento de los derechos territoriales y culturales de los campesinos: ¿qué hay de la etnicidad campesina?, ¿son los campesinos sujetos rurales cuya etnicidad no ha sido reconocida?, ¿qué tan diferentes son campesinos e indígenas en sus formas de pensar la naturaleza y conocer su funcionamiento?

Las tensiones económicas sobre el trabajo y la economía local presentadas en esta investigación trascienden a Guasca, pues se enmarcan en la situación general del campo en Colombia e, incluso, en Latinoamérica. Acorde con el *Informe nacional de desarrollo humano rural de 2011*, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las áreas rurales del país enfrentan altos índices de pobreza por cuenta de la alta concentración de la tierra y la falta de

empleos dingos en cuanto a contratos y salarios. El problema radica en la falta de políticas agrarias serias que fomenten el desarrollo y la equidad en el campo. Esta situación se presenta en Pueblo Viejo, en especial por la ausencia de contratos laborales estables con condiciones salariales adecuadas para la superación de la pobreza. Allí, las grandes fincas lecheras que concentran numerosas hectáreas de tierra no están brindando trabajo estable para la población.

Por su parte, otro tipo de propiedades extensas e históricamente dedicadas a actividades económicas que han suplido la demanda laboral se encuentran actualmente en manos de la FNC, la cual ha abierto la puerta a buena parte de los pobladores locales para el desarrollo de actividades pecuarias, bajo la modalidad de concesionarios de sus predios. Los pequeños ganaderos encuentran allí la posibilidad de comprar los pastos para el pastoreo de su ganado. En este aspecto, la FNC ha suplido las expectativas de los pobladores locales. No obstante, en cuanto al trabajo directo ofrecido por la FNC, existen una serie de reparos por su frecuencia y cantidad. Los pobladores esperan mayores fuentes de trabajo y con mayor regularidad en la RBE, pero el empleo que se ofrece es por días, por lo que la remuneración no alcanza para la subsistencia. Esto quiere decir que las formas directas de trabajo ofrecidas en la RBE no son una alternativa laboral para la población local.

En el contexto de pobreza rural en el país y de concertación de la tierra, los pequeños propietarios y campesinos sin tierra se ven abocados a arrendar predios, comprar pastaje o proletarizarse. En Guasca, se están dando dos de estas

dinámicas. La población local está comprando pastos de los predios de propiedad de la FNC. Esta situación se da debido a que los pequeños fundos no alcanzan para suplir las necesidades de producción que requiere la ganadería lechera como medio de subsistencia.

Por otra parte, los habitantes locales han sido empleados en algunas labores en la FNC como guías turísticos, cocineros, obreros y en servicios generales. Además, una buena parte de la población ha emigrado por fuera de la vereda para trabajar en fábricas, empleo doméstico y servicios generales, es decir, se ha proletarizado y urbanizado (Echeverri y Ribero, 2002).

En cuanto a la FNC, las labores no suplen la demanda de trabajo por cuenta de la escasez e intermitencia de su frecuencia y el hecho de que los trabajos de guías, cocina y servicios generales son realizados por las mismas personas (o por personas externas a la vereda), lo que disminuye el número de ofertas de trabajo que generan. Adicionalmente, los obreros y maestros de obra local son empleados para trabajar por temporadas en donde sea necesario realizar labores de mantenimiento de las instalaciones de la FNC o alguna construcción.

Las percepciones locales sobre el trabajo versan sobre la necesidad de mayores ofertas labores en la vereda, pues ven como una dificultad el desplazamiento por fuera del sector para buscar trabajo, en especial para las mujeres. Esto tiene que ver, asimismo, con una añoranza por la mina de caliza que era la fuente de muchos trabajos cercanos a las viviendas de los trabajadores y que les proporcionaba

óptimas condiciones a nivel de salarios, condiciones laborales y prestaciones sociales.

Esta investigación indagó por las tensiones que surgen en las formas de empleo ofrecidas por la FNC y sus implicaciones para la economía local. Por un lado, las concesiones para la venta de pastos en la RBE han sido una forma de democratización del acceso a la tierra, en tanto estos predios estuvieron bajo explotación directa de sus dueños y posteriormente de un arrendatario, quien no subarrendaba. La población era empleada en las labores que realizaban los propietarios o el arrendatario como mano de obra asalariada. Al constituirse la RBE, la población empezó a tener mayor acceso a estos predios para su usufructo particular e independiente en actividades ganaderas. Allí se encuentra el papel clave de las concesiones para la economía local. Esta área protegida, al permitirles a gran parte de la población local el desarrollo de las actividades económicas en ganadería que les brinda subsistencia, ha ayudado a fortalecer buena parte de la economía local, a la vez que genera recursos monetarios para el sostenimiento de la RBE expresados en los pagos que hacen los concesionarios por las pastadas.

En consecuencia, la FNC se ha articulado con algunas formas económicas locales. Su lógica de venta de pastos se basa en las formas locales de compra de este recurso natural. Sin embargo, existen concesionarios que les gustaría pasar a ser arrendatarios de la FNC porque esto les permitiría disponer de manera más autónoma y prolongada de los predios al interior de la RBE. Este reparo implica que el acceso a los recursos naturales por medio de las concesiones tiene lugar,

pero bajo unas condiciones particulares de aprovechamiento que impiden la efectuación de “mejoras” o la intervención de los terrenos.

Es decir, el régimen de propiedad y la capacidad de decisión sobre estas tierras no se trasfieren ni siquiera de forma momentánea, como lo supondría un contrato de arrendamiento. Los concesionarios usan lo que les corresponde (agua y pastos), pero carecen de poder de decisión y acción sobre estas tierras más allá de su actividad económica. Por esta razón, la concesión es la forma aplicada en las áreas protegidas porque permite mayor control sobre los usos de los recursos naturales en aras de una presumible concordancia con los objetivos de la conservación.

El manejo ambiental descentrado de la acción estatal por cuenta del neoliberalismo, para el caso de Guasca, se torna complejo. Las concesiones, como se ha sostenido en esta investigación, no implican como tal una gobernanza o un manejo participativo sobre los recursos ambientales. Aquí es necesaria la distinción entre acceso a los recursos y manejo. Si bien el acceso implica un uso, esto no quiere decir un manejo efectivo que implique la toma de decisiones sobre el aprovechamiento de estos recursos naturales. La FNC es la que determina estos usos, eso sí, dentro de los parámetros que supone un aprovechamiento ganadero propio de la zona.

Obviamente existe un margen de negociación en el que las poblaciones locales exigen unos mínimos necesarios de aprovechamiento relacionadas con su actividad ganadera. Sin embargo, el grueso de las decisiones sobre el uso de

los recursos naturales de la RBE es una decisión que le ha competido solamente a la FNC. Por lo pronto, las concesiones han servido como sustento económico para la población local, pero no como una forma de descentralización y democratización del manejo ambiental y de participación efectiva de la población local en la toma de decisiones sobre la RBE.

¿Puede el trabajo en las áreas protegidas fomentar la participación en su manejo? No deja de ser cuestionable hasta qué punto una interacción de patrón-empleado (con las relaciones de poder que conlleva) pueda fomentar una participación efectiva. Es decir, no se puede asumir que un modelo de descentralización del manejo ambiental signifique un verdadero empoderamiento de la población local, mucho menos si está basado en el trabajo.

Por otra parte, el proponer que las poblaciones locales deban dialogar con un sujeto externo para poder manejar los recursos naturales y el entorno que han habitado por generaciones es sumamente complicado si se tiene en cuenta lo que ello acarrearía en cuanto a su autonomía y derechos territoriales. Además, el hecho de que algunos trabajen en la RBE y otros no puede socavar la participación de algunos pobladores, toda vez que se generen pugnas internas en la población local por el acceso a los beneficios laborales, participativos y económicos en el área protegida. El modelo neoliberal de gobernanza ambiental, cuya base es la descentralización de las funciones de manejo ambiental estatal para delegarlas en actores privados, no puede desligarse de las relaciones de poder y la desigualdad entre las partes, así como sus intereses particulares y motivaciones.

En el caso de la RBE, pese a la existencia de unos pocos puestos de trabajo por días y un número significativo de concesionarios, no se han fomentado formas de gobernanza en las que la población sea partícipe en la toma de decisiones y el manejo ambiental del área protegida de forma efectiva. En este texto se argumenta que son los trabajos y las concesiones, acompañados claro está de procesos de concertación, los que pueden llegar a permitir a las personas manejar los recursos naturales y recibir un sustento económico.

El trabajo y las concesiones son formas de actuar concretas que, orientadas más allá de la relación propietario de la tierra-comprador de pastos o empleado-jefe, pueden significar maneras efectivas de empoderamiento en la práctica del manejo de los recursos del ambiente. Esto tendría que ver con que los concesionarios y empleados contaran con voz y voto en la toma de decisiones del área protegida y que pudieran manejar los recursos naturales de manera más autónoma a través de procesos de concertación con los administradores del área, pues, de lo contrario, solo seguirían siendo antiguos trabajadores mineros (o hijos de ellos) hoy convertidos en concesionarios y mano de obra del ecoturismo.

Como parte de la antropología ambiental, en Colombia está surgiendo todo un campo de estudio de los procesos políticos de intervención y lucha entre los discursos ambientales globales y los modelos locales de naturaleza y territorio (Ojeda, 2012; Bocarejo, 2011; Del Cairo, 2012). Los intereses de estudio de la antropología por las formas de apropiación humana del entorno están ahora dando un giro hacia propuestas que enfatizan en las luchas político-ambientales

de carácter simbólico y económico, en relación con procesos globales. Estos nuevos enfoques están siendo desarrollados por todo un equipo de trabajo en el Centro de estudios en ecología política (CEEP)

Dentro de estas pretensiones, y en el marco de este libro, están aún por analizar, entre otros aspectos, cómo las formas de simbolización que los campesinos elaboran de la naturaleza están en lucha con el ambientalismo y cuáles son los “modelos campesinos” de naturaleza.